



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

Medellín, junio 2 de 2022

Radicado: 05001- 31- 05-002-2019-00007- 01
Demandante: TERESITA DE JESÚS TORO PAREJA
Demandada: MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Asunto: CONSULTA DE SENTENCIA
Tema: CONTRATO DE TRABAJO – PRESTACIONES SOCIALES

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia. Decisión que se emite de manera escrita, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 2020.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

Con su demanda, la parte actora pretende la declaratoria de la existencia de una relación de trabajo con el Municipio de Medellín, con ocurrencia entre el 16 de enero de 1995 y el 16 de noviembre de 2018 donde la actora aduce realizó las labores de limpieza, mantenimiento de la estructura física, jardinería y vigilancia, por lo que reclama el reconocimiento de salarios, prestaciones sociales, compensación en vacaciones, por todo el tiempo de servicio, al igual que indemnizaciones por despido, por falta de pago de emolumentos laborales, así como la pensión sanción.

Notificada la acción la pasiva presentó contestación a la misma, donde de forma categórica niega la existencia de la relación laboral y de contera de las prestaciones y derechos exigidos.

En sentencia de primera instancia, el fallador luego de advertir los elementos constitutivos de una relación laboral, expuso que en el presente evento no se demostró su configuración, en particular no se acreditó que Teresita de Jesús Toro Pareja prestara un servicio para el Municipio de Medellín. En contraste halló probado que la permanencia de la actora y su familia dentro de la vivienda anexa a una institución educativa del Municipio de Medellín lo fue en virtud de un contrato de comodato que si bien fue suscrito por Darío de Jesús Velásquez, esposo de la actora fue esta quien continuó con el ejercicio del derecho de uso, dada la ruptura de la relación sentimental de la pareja.

Refirió que no hubo una prestación del servicio, sino que las actividades que se aducen como trabajo eran las obligaciones recíprocas del contrato de comodato, para beneficiarse del uso gratuito de la vivienda, sin pago de servicios públicos, condiciones que fueron aceptadas por la activa, sin que se demostrara que se emitieran órdenes, no se demostró que realizara labores administrativas, no se presentaron reclamos referente a una remuneración durante 23 años, como tampoco se ejerció un poder disciplinario. Bajo estas conclusiones, absolvió a la pasiva de todas las súplicas, sin gravar en costas a la actora.

Decisión que no fue impugnada por ninguna de las partes, pero al ser adversa a los intereses de aquella que se reputa como trabajadora, de la misma conoce la corporación en el grado de Consulta (artículo 69 CPTSS)

ALEGATOS

Pese a concederse el término de traslado que trata el decreto 806 de 2020, ninguna de las partes presentó escrito alguno.

CONSIDERACIONES

Corresponde a esta corporación determinar si entre la accionante Teresita de Jesús Toro Pareja y el Municipio de Medellín existió una relación de naturaleza laboral; en particular se abordará el estudio de las probanzas referentes a una prestación personal de un servicio en favor del ente municipal, aunado a los demás elementos constitutivos de la relación laboral. En caso de hallar configurado tal vínculo, se determinará la viabilidad de las condenas reclamadas

Pues bien, como premisa ha de indicarse que el contrato de trabajo no existe en el acuerdo abstracto de voluntades sino en la materialización de la prestación del servicio, por ende, esto último y no el acuerdo verbal o escrito, es lo que determina su existencia (Art 53 CP). Así, en el artículo 23 del CST, se señalan como elementos de este tipo de contratos: la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario.

Ahora bien, según el artículo 24 del mismo estatuto, debe presumirse que *toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo*. Por lo tanto, si en un proceso se establece que se dio una prestación personal de servicios remunerada y se desconoce si fue subordinada o no, o subsiste duda a este propósito, deberá el respectivo juez concluir que la relación estuvo regida por un contrato de trabajo con las consecuencias jurídicas que ello pueda aparejar. Ello no significa, como lo ha dicho el órgano de cierre “...que tal presunción haya pretendido abolir las relaciones laborales independientes, ni en modo alguno las descartó...”, pues al contrario supone que el concepto de relación de trabajo es un género que contiene especies diversas entre las cuales, fuera de la modalidad subordinada, se hallan las prestaciones de servicios que en modo independiente y bajo diversas expresiones contractuales se pueden efectuar.

Solo que el artículo 24 “...en desarrollo del concepto de protección al trabajador consagra la presunción enunciada, de forma que este se halla liberado de acreditar la subordinación...cosa que no impide que aparezca la prueba de que el vínculo en cuestión en realidad fue independiente....” (Ver Sentencias de la Corte Suprema de

Justicia Sala de Casación Laboral Radicado 14096 del 27 de junio de 2000 y SL 663-2018).

Por manera que, siguiendo las reglas generales de la carga de la prueba (art 164 y 167 del CGP), corresponde a aquel que se anuncia como trabajador, para favorecerse de la presunción aludida, acreditar con suficiencia que prestó un servicio personal para quien se repute empleador. Y a este último, si aspira a desvirtuarla, habrá de probar que la labor no responde a un esquema de subordinación.

Para el **caso concreto**, la actora sostiene que con el Municipio de Medellín se trabó una relación de naturaleza laboral, aduciendo que por 23 años realizó actividades de aseo, sostenimiento, vigilancia e incluso de enseñanza dentro de la institución educativa Escuela Jardín Infantil Nacional N°1 sección Octavio Harry, ubicada en la carrera 72 a N° 20 a 62 del Municipio de Medellín (institución que tuvo varias denominaciones como Escuela República de Guatemala y para la fecha de la presentación de la acción Institución Educativa Yermo y Parres). A su turno el ente municipal accionado expuso que la permanecía de la actora y su familia en el inmueble ya identificado, lo fue en razón al contrato de comodato por el cual se le permitió el uso de la vivienda anexa a la institución educativa, pero nunca con ocasión de una vinculación laboral

Bajo este panorama polarizado fueron analizadas las pruebas adosadas al trámite, hallando que:

- Mediante contrato de comodato celebrado entre el Municipio de Medellín y Darío de Jesús Velásquez se permitió a este y su núcleo familiar, compuesto por su esposa Teresita Toro (accionante) y sus cuatro hijos el uso de la *“vivienda del local donde funciona el Jardín Infantil Nacional Número Uno (antes Escuela República de Guatemala) ubicada en la carrera 72 20 a 62...”* estableciendo un término de duración de 2 años desde el 16 de noviembre de 1988. En contraprestación al comodatario, además del uso exclusivo del inmueble para vivienda, el adecuado cuidado y restitución, se impusieron las siguientes obligaciones puntuales:

1. *Emplear el mayor cuidado en la conservación del bien objeto de este contrato, siendo responsable de cualquier deterioro que no provenga de la naturaleza o uso legítimo de la cosa (artículo 2203 del Código Civil); además, el COMODATARIO se obliga a efectuar las reparaciones locativas (artículo 1998 de Código Civil).*
2. *Mantener buenas relaciones con el personal docente y administrativo y con los educandos.*
3. *Hacer uso adecuado de los servicios de agua, luz y teléfono. Prohibese (sic) las llamadas de larga distancia.*
4. *Vigilar el inmueble en ausencia de los docentes.*
5. *Informar oportunamente al director (a) del establecimiento y a la secretaria de Educación, Cultura y Recreación Municipal de los daños que se presenten en el inmueble.*
6. *Permitir la realización por parte del MUNICIPIO DE MEDELLÍN de las mejoras o reparaciones que se requieran.*
7. *Tanto el COMODATARIO como los miembros de la familia deberán prestar pequeños servicios en favor del plantel como pender las luces exteriores en la noche y apagarlas al amanecer, regar el jardín los fines de semana y en las vacaciones lectivas, atender el aseo de los patios y corredores durante el mismo tiempo.*
8. *Impedir que la escuela sirva de parqueadero nocturno, e impedir igualmente el lavado de carros.*
9. *Abrir la puerta de la calle para la entrada del personal que labora y de los alumnos, al igual que cerrarla con las seguridades del caso cuando dicho personal abandone el local.*
10. *En ausencia de los docentes, en la escuela deben permanecer los COMMODATARIOS o personas de la familia mayores de edad.*
11. *Impedir que personas ajenas se instalen de forma temporal o definitiva en el inmueble mencionado. Queda terminantemente prohibido que personas extrañas al núcleo familiar habiten la vivienda.*
12. *Mantener la vivienda en perfecto estado de orden y limpieza.*
13. *Restituir el inmueble dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud escrita de entrega formulada por el abogado Jefe del Departamento de Bienes inmuebles de la Personería Municipal, previo concepto de la Administración (...) (fls. 61/63)*

Autorización de uso de la vivienda bajo las mismas condiciones y obligaciones que se reiteró en escrito suscrito por el Alcalde de Medellín y el señor Darío de Jesús Velásquez el 20 de agosto de 1991, con una vigencia de inicial de 2 años prorrogables. En este documento se autoriza el uso del inmueble para el suscriptor y su núcleo familiar, que incluye a la esposa Teresita Toro y cuatro hijos (fls. 64/66)

- Que el inmueble dado en comodato fue restituido producto de una decisión judicial del Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Medellín, instaurado por el ente territorial en contra del señor Darío de Jesús Velásquez (fls. 252/258) entrega que se realizó en el mes de noviembre de 2018, tal como lo señala la actora en su

interrogatorio y se informa en el escrito de fl. 260 donde el Municipio de Medellín informa al Juzgado 2° Administrativo de la entrega del inmueble.

Como pruebas testimoniales se escucharon los señores María del Pilar Díaz Peláez, Guillermo León Ramírez, Luis Fernando Hernández Gutiérrez, Ana Elizabeth Velásquez Torres e Isabel Angarita Nieto, de cuyas declaraciones se destaca lo siguiente:

María del Pilar Díaz Peláez y Luis Fernando Hernández Gutiérrez, refirieron conocer a Teresita de Jesús y su familia por muchos años en tanto fueron vecinos en el sector. Narraron que Teresita era la “celadora” de la institución educativa que ha tenido varios nombres, inicialmente Escuela República de Guatemala, luego Jardín infantil Nacional N° 1° y por último Institución Educativa Yermo y Parres

María del Pilar Díaz Peláez (tiempo de la audiencia minuto 59 en adelante) afirmó que Teresita aseaba la escuela, sembraba matas y hacía el mantenimiento locativo de la institución, empero cuando se le indagó por la periodicidad de tales actividades o su horario expresó desconocerlo, en tanto solo la veía ocasionalmente cuando llevaba un sobrino a la escuela, aclarando que en su sentir Teresita era la celadora porque siempre estaba allí y presume o se imagina que si alguien tocaba la puerta era ella quien la abría, en tanto estaba allí todo el tiempo.

En cuanto a la asignación de tareas a Teresita total fue su desconocimiento; no sabe si recibía directrices de profesores o el rector, y nuevamente asume que si Teresita vivía en el centro educativo era con el consentimiento del Gobierno. Cuando se le indagó por esta permisión, la testigo negó conocerla, pues lo único que sabe es que en una ocasión vio a Teresita con el delantal que usaban las profesoras infantiles y en su sentir no era necesario que portara una escarapela o carnet, pues ello no es necesario para que una persona viva en su casa.

A su turno **Luis Fernando Hernández (tiempo de la audiencia 2:06:00)** expresó haber vivido al frente de la institución educativa desde 1989 y por tanto identifica a Teresita como la celadora, a quien veía barriendo el patio, trapeando, que ella al tener las llaves

de la institución era quien cerraba y abría la puerta e incluso una ocasión la vio en el techo reparando una filtración “cogiendo goteras”. Al indagarle por la obligatoriedad de realizar tales tareas o la imposición de órdenes nulo fue el conocimiento en tanto no tenía contacto personal con Teresita yaque este testigo trabajaba por tanto no podía estar al tanto de la actividad diaria, además que él en el año 2002 se mudó de casa, aunque ocasionalmente acudía a la institución educativa para realizar reparaciones eléctricas, momentos donde eran los vigilantes (empresas de vigilancia) quienes le permitían el ingreso.

El señor **Guillermo León Ramírez (tiempo de la audiencia 1:30:00)** expresó que desde el año 2003 funge como Rector de la institución educativa “Yermo y Parres” donde al llegar conoció a Teresita al ser presentada como la comodataria de la vivienda dentro de la sección de primaria, narrando que este ente educativo tiene varias sedes y que él como rector tenía su oficina en la sede de secundaria situado a 18 cuadras de la sección primaria, por tanto no tenía un contacto diario con la actora.

Expresó que él como rector debía mantener un ambiente agradable de trabajo e interactuar no solo con los maestros, pero además con terceros como es el personal de vigilancia, de aseo, las cocineras de los restaurantes escolares y en este caso con la comodataria Teresita, a quien identificó como una persona muy atenta, dispuesta a ayudar, precisando que para finales del año 2003 cuando él ya fungía como rector se delegaba a la institución la contratación de los servicios de vigilancia y aseo que se hacía a través de terceros, y que a partir del año 2009 esta contratación la asumió el municipio, por tanto proveían los vigilantes, personal de aseo y secretarias, empero Teresita y su familia seguía viviendo dentro de la institución.

Narró que sabía de la condición de comodataria que ostentaba Teresita, por lo que nunca supervisó sus funciones, no le imponía un horario, no la disciplinaba como tampoco debía autorizar su ausencia en la escuela, pero al ser una persona disponible acudía a ella para pedirle “favores”, pero no a título de órdenes pues sabía que no era su jefe, sin que de ella hubiera recibido alguna reclamación referente al pago de un salario.

También fue escuchada **Ana Elizabeth Velásquez Torres (tiempo de la audiencia minuto 37)** hija de la demandante quien indicó que su familia se mudó a esta escuela cuando ella era pequeña, en 1982 y narra que todos en el hogar tenían labores dentro de esta institución como barrer, trapear, recoger las hojas de los árboles, podar la grama; señaló que en una ocasión se generó un daño en una tubería y ellos la repararon pues de esto dependía el servicio de agua de su hogar, además que debían estar pendiente de la puerta, el encendido de luces y que en una ocasión un muro exterior de la institución colapsó por lo que su familia, con la ayuda de la comunidad lo construyeron, aclarando que no recibían retribución por este servicio.

Indicó que la rectora de la institución “Cecilia Pacheco” ejercía mucha presión sobre Teresita e incluso ella le tenía miedo, por cuanto era muy demandante calificando sus tratos como abuso: le exigía que contestara el teléfono, le preparara el almuerzo, le brindara café, estuviera pendiente de la escuela los fines de semana cuando esta rectora prestaba la escuela para actividades, firmara cheques e incluso una ocasión cuando una maestra estaba enferma fue enviada a cuidar y jugar con los niños-alumnos.

Señaló que para el año 2003 la institución contaba con vigilancia de lunes a viernes de 6 am a 6 pm y en adelante el cuidado de la institución seguía a cargo de Teresita, y cuando ya se prestó el servicio de vigilancia de forma permanente ellos como habitantes de la escuela tenían problemas de movilidad, pues no podían entrar y salir con libertad.

Luego, fue escuchada **Isabel Angarita Nieto** quien como líder del grupo jurídico del Municipio de Medellín indicó desconocer a la demandante en tanto la información que posee es referente al proceso de restitución del inmueble que esta habitaba a título de comodato. En cuanto a este convenio señaló que fue suscrito entre el alcalde de Medellín y el señor Darío Velásquez esposo de la actora y quien junto con sus 4 hijos figuraban como beneficiarios de la tenencia del bien, a la vez que este les imponía unas obligaciones de cuidado a cambio del uso gratuito de la vivienda y servicios públicos domiciliarios.

Por otra parte encuentra esta corporación relevantes algunos de los dichos de la **actora en su interrogatorio de parte**, quien tras reiterar los hechos expuestos en la demanda referente a la ocupación del inmueble dentro de la institución educativa, refirió que el contrato de comodato fue suscrito por su esposo, quien abandonó el hogar pero ella no dejó de habitar en la escuela, expresando que nunca pagó un canon de arrendamiento, ya que su retribución era el cuidado de la institución, así indicó: *“mis gastos con la institución fueron el deterioro de los años, la falla que tenían los servicios públicos, contratar para darle mantenimiento a la institución (minuto 59 de la audiencia)*

Luego al indagarle por la persona que ejercía el poder subordinante o imponía órdenes refirió que estaba sometida al control del rector, de los profesores y de la comunidad e incluso de los obreros del municipio pues cuando realizaban una obra en el sector ella “les cuidaba las cositas”.

Son estas las pruebas recaudadas en el trámite las que valoradas en conjunto, de cara a las reglas de la libre formación del convencimiento llevan a esta corporación a concluir que no se establecieron los presupuestos de configuración de una relación laboral, en particular no existió una prestación personal del servicio subordinada en favor del Municipio de Medellín.

El material documental adosado permite establecer sin duda alguna que la permanencia de la actora y su grupo familiar se produjo en razón de un contrato de comodato, el que si bien fue suscrito por quien fuera su compañero sentimental “Darío Velásquez” el contrato permitió a la actora y sus hijos el uso del inmueble, sin que la señora Toro Pareja al momento de la culminación de la relación sentimental hubiera restituido el inmueble y por el contrario continuó ejerciendo el derecho de tenencia, por tanto inocuas son los argumentos de la activa referente al desconocimiento de la calidad de comodataria.

También quedó establecido que el contrato de comodato, además de brindar una solución de vivienda a este núcleo familiar y la exoneración del pago de servicios públicos, sin generar a ellos un canon de arrendamiento, traía conexas una

contraprestación material referente al cuidado y conservación del bien, descritas en los documentos ya enunciados (fls 61/66)

Ahora en cuanto a la ejecución de las tareas que se califican como trabajo, los testigos María del Pilar Díaz Peláez y y Luis Fernando Hernández refirieron con suficiencia que Teresita se encargaba de labores de aseo, mantenimiento del jardín y atención de la puerta de ingreso sin embargo nulo es el conocimiento respecto a la obligatoriedad de estas labores, no saben si estas se ejecutaban por órdenes de alguien, no saben si se tenía un horario, pues refieren que Teresita estaba siempre, aclarando que esta era su vivienda, y por tanto asumen que siempre estaba al cuidado de la institución.

En contraste **Guillermo León Ramírez**, directivo de la institución educativa develó que al tener clara la condición de comodataria de la actora obró frente a esta respetando tal calidad, sin ejercer un poder subordinante, pero acudiendo a sus servicios dado que era una persona servicial y que junto con su familia se estaba beneficiando de una vivienda gratuita, por tanto tenía un compromiso de retribución, pero sin delegar en esta actividades inherentes al funcionamiento de la institución en tanto la vigilancia, aseo, servicio de alimentación y actividades administrativas (secretarías) desde el año 2003 fueron contratadas con terceros con recursos de la institución y a partir del año 2009 contratadas por el Municipio de Medellín.

Ahora en cuanto a los dichos de **Ana Elizabeth Velásquez Torres**, hija de la actora y quien además habitó en la institución, se devela que no había una prestación personal del servicio de aseo y vigilancia por parte de la demandante, pues como esta testigo lo indica toda la familia tenía tareas por cumplir, por tanto, se descarta que Teresita realiza de forma exclusiva las labores que deprecia.

De sus dichos se revela que todo el núcleo familiar actuaba conforme a las reglas del contrato de comodato, cumpliendo con el deber de cuidado de la vivienda que les fue entregada para uso y que si bien implicó hacer tareas de mantenimiento, destacando que no se probó la compra de material de construcción, tejas, grifos de agua, timbre, todo esto es inherente al desgaste natural de las viviendas, máxime en un tiempo de 23

años y que redundó en su propio disfrute, en tanto el ingreso a ambos inmuebles (colegio y vivienda) era el mismo entonces a la par que procuraban la seguridad de la institución lo hacían de sus propios bienes, al igual que la reparación del daños en el servicio de agua, que era el mismo del que se beneficiaban y respecto a la construcción de un muro, esta testigo refirió que fue una obra realizada por la comunidad, no como un acto laboral e individual de la actora.

Se develó además que algún periodo de los 23 años de permanencia de esta familia, la institución contaba con servicio de vigilancia. Fue así que esta testigo narró que tenían dificultades para el ingreso y salida, con un horario restringido y debiendo contar con autorizaciones, lo que resulta apenas lógico teniendo en cuenta que se trata de la custodia de bienes públicos, pero además muestra que no era Teresita la vigilante de la institución.

Por último, con los dichos de la actora se configuró una confesión referente a la condición de comodataria del inmueble y su correlativo deber de cuidado con el bien al indicar que no pagaba un canon de arrendamiento pero en compensación debía cuidar de la institución al indicar: “...*mis gastos con la institución fueron el deterioro de los años, la falla que tenían los servicios públicos, contratar para darle mantenimiento a la institución*” (minuto 59) confesión que también aplicó respecto a la ausencia de poder subordinante, en tanto en su imaginario debía obediencia a toda la comunidad al indicar que recibía órdenes de docentes, de la comunidad e incluso de los trabajadores de obras públicas del Municipio de Medellín a quienes “les cuidaba las cositas” cuando se realizaban obras de reparación en el sector.

En suma, toda vez que se demostró que las labores que realizó Teresita de Jesús Toro y su núcleo familiar fueron las obligaciones generadas por la aceptación y beneficio del comodato o préstamo de uso de una vivienda por espacio superior a 23 años, no logran configurarse los contornos propios de una relación laboral e impide la declaratoria de los derechos reclamados, conclusión a la que arribó el fallador de instancia y que se confirma en esta instancia.

Costas como indicó el A quo. sin costas dentro del grado de consulta.

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **CONFIRMA DE FORMA TOTAL** la sentencia revisada en el grado de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

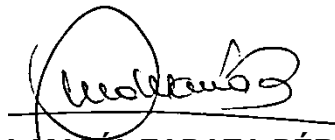
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ